



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Acta Nº 73

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ
Demandado: COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Radicado n.º: 05001-31-05-016-2018-00147-01 (20-128)

En Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como Magistrado Sustanciador, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, procede a decidir los recursos de apelación propuestos por la parte actora y la entidad demandada, al igual que el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última, dentro del proceso ordinario instaurado por **LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ** en contra de **COLPENSIONES**, que cursa bajo el radicado n.º 05001-31-05-016-2018-00147-01 (20-128).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a proferir la siguiente, **SENTENCIA:**

1. ANTECEDENTES

Mediante gestor judicial el señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ persigue el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por la señora WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLÓREZ (q.e.p.d.), los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación, y las costas del proceso, cuyo sustento fáctico hace consistir en que convivió con la *de cujus* desde el año de 1981, compartiendo permanentemente techo, lecho mesa con vocación de permanencia hasta el 6 de enero de 2008, fecha del óbito; que el 10 de marzo de 2008 deprecó ante la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañero permanente supérstite; que

mediante Resolución n.º 9053 del 30 de marzo de 2009, le fue negada la prestación pretensa, en consideración a que no convivía bajo el mismo techo con la causante al momento del fallecimiento; que la convivencia se vio interrumpida por circunstancias ajenas al demandante, y en razón a la que la *de cujus* era una acumuladora compulsiva de objetos y de animales callejeros, lo que convertía su hogar en un lugar insalubre e inhabitable para ambos, pero siempre pervivió el apoyo y auxilio mutuos, velando el demandante por la manutención de aquella ininterrumpidamente, al final afirma que la convivencia fue declarada judicialmente mediante sentencia judicial proferida por el Juzgado Once de Familia de Medellín, confirmada el 11 de febrero de 2010 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín.

La demanda fue admitida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 12 de abril de 2018 (fol. 48), ordenando su notificación y traslado a la entidad accionada (fol. 49), misma que contestó la demanda el 4 de mayo de 2018 (fols. 51 a 58), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, arguyendo al efecto que el demandante no reúne los requisitos legales para ser beneficiario de la prestación económica instada.

El 12 de marzo de 2020, en el desarrollo de la etapa procesal de decreto de pruebas, al interior de la audiencia consagrada en el artículo 77 del CPT y la SS, el cognoscente de instancia denegó la práctica de la prueba testimonial deprecada con la demanda (min. 4:00), por no haberse enunciado en ésta concretamente los hechos objeto de la prueba testimonial instada y por estimarla innecesaria.

La decisión adoptada fue apelada oportunamente por la apoderada judicial de la parte actora (min. 5:00), arguyendo al efecto que no se puede acudir a las normas del CGP en materia de prueba testimonial, por existir norma expresa en el CPT y la SS, y que no se pueden exigir requisitos formales para el decreto de la prueba; que al momento de admitir la demanda, el despacho no hizo la devolución de la misma por carecer de requisitos formales, para que fuera subsanada por la parte actora, y por ello procede el decreto de la prueba testimonial, medio de impugnación que fue concedido por el a quo en el efecto devolutivo.

En orden a resolver de fondo el asunto, se advierte que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S., el estudio de la decisión impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, para lo cual de manera prístina ha de relievase que el numeral 9º del artículo 25 del CPT y de la SS dispone que “(...) *La demanda deberá contener: (...) 9. La petición en forma*

individualizada y concreta de los medios de prueba, (...)"; empero, no existe norma alguna en el estatuto adjetivo laboral que regule la forma y requisitos para la solicitud y el decreto de la prueba testimonial, de suyo que, al efecto, en razón a lo dispuesto por el artículo 145 del estatuto adjetivo laboral, es dable acudir a lo dispuesto por los artículos 212 y 213 del CGP, que en su tenor literal disponen:

“Artículo 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. (...)

Artículo 213. Decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente.”

Como se advierte, efectivamente la normativa procesal sí establece unos requisitos formales para la petición de la prueba testimonial, los cuales deben ser cumplidos por la parte que solicita la prueba, so pena de que se deniegue el decreto de la prueba solicitada.

Adicionalmente, ha de relievase que en la apelación planteada por la parte actora, no se sustentó la pertinencia, conducencia o necesidad de la prueba denegada, por lo que en esta etapa procesal no podrá pronunciarse esta Corporación judicial al respecto, se reitera, en observancia del principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del CPT y de la SS.

Corolario de lo expuesto, se impone la confirmación de la decisión del 12 de marzo de 2020, mediante la cual el *a quo* denegó el decreto y práctica de la prueba testimonial impetrada con la demanda, debiéndose condenar en costas a la parte actora a favor de la parte accionada, por haberse resuelto desfavorablemente la apelación propuesta, de conformidad numeral 1º del artículo 365 del GCP, fijándose al efecto la suma de **\$908.526**, equivalentes a 1/2 SMLMV.

Posteriormente, en la misma diligencia, en la etapa procesal para alegar de conclusión dentro de la audiencia consagrada en el artículo 80 del CPT y de la SS, la apoderada judicial de la parte actora propuso que se declarara la nulidad de la actuación por la causal constitucional de violación al debido proceso, (min. 40:26), esgrimiendo para ello que el juez no debía proferir sentencia hasta tanto no se resolviera la apelación propuesta contra

la decisión de no decretar los testimonios instados con la demanda, puesto que el juez debió haber concedido la apelación en el efecto suspensivo.

Nulidad que fue denegada acto seguido por el *a quo* en la misma diligencia por estimar que la apelación debía concederse en el efecto devolutivo y la normativa no inhibe al juez para proferir sentencia mientras se encuentra pendiente la resolución de la apelación por el superior (min. 47:00), a la vez de condenar en costas, decisión que fue recurrida oportunamente por la apoderada judicial de la parte actora, argumentando que el juez debe esperar a que se resuelva la apelación propuesta antes de proceder a dictar sentencia, alzada que fue concedida en el efecto devolutivo en la misma diligencia por el juzgador de instancia.

Para resolver de fondo este ítem, ha de memorarse el contenido del inciso 4º del artículo 323 del CGP, según el cual “*La apelación de los autos se otorgará en el efecto devolutivo, a menos que exista disposición en contrario.*”, para indicar que como no existe disposición normativa que regule el efecto en que debe concederse la apelación del auto que deniega el decreto de las pruebas, la misma ha de concederse en el efecto devolutivo.

De otro lado, el inciso 10º del artículo en cita, ordena que “*La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia*”, con la sola advertencia de que bajo el supuesto de haberse proferido sentencia sin haberse resuelto la apelación del auto, la parte apelante deberá también apelar la sentencia, so pena declararse desierta la apelación del auto.

En igual sentido, establece el artículo 230 del CGP, que en caso de que el superior revoque en apelación el auto que denegó el decreto de pruebas, y ya se hubiere proferido sentencia de primera instancia “*el superior practicará las pruebas en la audiencia de sustentación y fallo*”, siempre que la sentencia también hubiere sido apelada, pues de lo contrario, el recurso de apelación contra el auto debe declararse desierto, en atención a las previsiones contenidas en el artículo 323 del CGP, ya citado.

De conformidad con la normativa procesal, el *a quo* se encontraba facultado para proferir sentencia de primera instancia, razón por la cual no se incurrió en ninguna vulneración al debido proceso, debiéndose confirmar la decisión del cognoscente de instancia del 12 de marzo de 2020 que negó la nulidad propuesta por la apoderada judicial de la parte actora, imponiéndose condenar en costas a la parte actora y a favor de la parte demandada, por haberse resuelto desfavorablemente la apelación interpuesta, de conformidad numeral 1º

del artículo 365 del GCP, fijándose al efecto la suma de **\$908.526**, equivalentes a un (1) SMLMV.

1.1. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 12 de marzo de 2020 (fols. 105 a 108 con el CD de la audiencia), oportunidad en la cual el cognoscente de instancia condenó a COLPENSIONES a pagar al señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ la pensión de sobrevivientes causada por WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLÓREZ desde el 2 de marzo de 2015, en cuantía de 1 SMLMV, junto con la indexación causada, y gravando en costas a COLPENSIONES a favor del señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ.

1.2. APELACIÓN

La decisión adoptada fue apelada por los apoderados judiciales de los extremos litigiosos, en la forma que pasa a detallarse:

Demandante: Solicita que los intereses moratorios proceden en el presente caso porque la negativa de Colpensiones no fue justificada, pues la entidad pudo haber reconocido la prestación desde el momento de la reclamación inicial si hubiere hecho un análisis probatorio de la convivencia, a más de que dichos intereses moratorios son resarcitorios y no sancionatorios, de forma tal que, son procedentes independientemente de las razones que esgrimió la entidad accionada para negar la prestación económica pretensa en sede administrativa.

El apoderado judicial de LEONARDO RAMÍREZ CRUZ aportó oportunamente alegatos de conclusión en los que refiere revocar la sentencia de primera instancia en cuanto absolvió a Colpensiones del reconocimiento y pago de los intereses moratorios, para en su lugar imponerlos, por no encontrar ajustada la respuesta de negar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Igualmente ordenar la práctica de pruebas que sean necesarias para atender las pretensiones de la demanda, así mismo se revoque la condena en costas sobre aquel auto, que además de ser excesiva, es infundada.

Colpensiones: Alegó que el demandante no cumple con los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, por no haber acreditado que al momento del fallecimiento de la causante convivía con ella, misma que era una acumuladora compulsiva, a la vez de que la investigación administrativa concluyó que al momento del

óbito el demandante llevaba separado 4 años de la *de cujus*, siendo que el demandante inclusive contrajo matrimonio con la señora Luz Estela Ochoa en el año 2006. En igual sentido, solicita que el fallo proferido por el Juzgado Once de Familia de Medellín y confirmado el 11 de febrero de 2010 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, sea revisado en cuanto a la veracidad de los hechos y pruebas en que se fundamentó la declaratoria de unión marital de hecho, porque para la fecha de la providencia en comento, el accionante se encontraba casado.

La apoderada judicial de COLPENSIONES aportó oportunamente alegatos de conclusión en los que solicita no acceder a las pretensiones del demandante, pues no logra acreditar la calidad de beneficiario, pues no convivió con la causante durante los 5 años anteriores a su deceso.

1.3. CONSULTA:

Se surte igualmente el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, por haber sido adversa la sentencia de primera instancia a sus intereses, conforme a lo dispuesto por el artículo 69 del CPTSS.

ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes procesales, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, así como también se revisará integralmente la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

PROBLEMA JURÍDICO:

La Sala procederá a dilucidar ¿Si el señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ reúnen los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por la señora WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLÓREZ (q.e.p.d.) en calidad de compañero permanente supérstite, y de ser así, deberá estudiarse si se causaron los intereses moratorios y el monto del retroactivo pensional p?

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

El sentido del fallo de esta Corporación será **revocatorio**, para en su lugar absolver a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra por el demandante, en tanto se acreditó que LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ no reúne los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes pretensa en calidad de compañero permanente supérstite, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. Pensión de sobrevivientes

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que la causante falleció el 6 de enero de 2008 (fol. 14).

En consonancia con la preceptiva anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que fallezca. Punto sobre el cual no hay controversia, puesto que la propia entidad demandada aceptó en la Resolución n.º 9053 del 30 de marzo de 2009 que la afiliada fallecida WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLÓREZ *“cumplió así la fidelidad esperada de 348 semanas y las 50 semanas requeridas en los últimos tres años anteriores al fallecimiento, reuniendo así los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes”* (fol. 43 vto.).

Acreditado que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera(o) permanente supérstites, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, sólo para el caso en que el causante sea pensionado, conforme el reciente cambio jurisprudencial sentado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL1730-2020, siendo que la acreditación de tales requisitos es carga procesal de los eventuales beneficiarios, tal como lo adoctrina la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema

de Justicia, en sentencia con radicación n.º 38213 del 28 de septiembre de 2010, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

De forma que, el asunto que amerita un análisis probatorio exhaustivo radica en si el señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ cumple con el requisito de la convivencia en calidad de compañero permanente supérstite, para lo cual deberá establecerse si demostró que convivió con la causante, para el momento del óbito, esto es, el 6 de enero de 2008.

Ello así, de cara al estudio de la convivencia del señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ con la señora WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLÓREZ, debe partirse de la base según la cual, desde los hechos plasmados en el escrito incoativo se confiesa que *“por motivos ajenos a la voluntad de mi mandante, él y la señora WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLOREZ no convivieron de manera permanente (...) bajo el mismo techo durante el último año de vida de ésta última (...) la convivencia permanente bajo el mismo techo se vio en ocasiones interrumpida, toda vez que la señora WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLOREZ era una acumuladora compulsiva (...) convirtiendo su hogar en un lugar inhabitable por falta de orden y condiciones higiénicas adecuadas (...)”*.

Luego, si bien lo anterior conllevaría a educir que efectivamente la pareja RAMÍREZ AGUIAR no convivió bajo el mismo techo ininterrumpidamente para el 6 de enero de 2008, lo cual conduciría indefectiblemente a la denegación de sus pretensiones, no soslaya la Sala que es viable acreditar que a pesar de estar materialmente separados, pervivió el ánimo de conformar una familia a través de un vínculo afectivo y el apoyo espiritual y económico mutuo hasta el momento del fallecimiento, en consideración a que de tiempo atrás la jurisprudencia laboral ha admitido que cuando la pareja se separe materialmente por fuerza de las circunstancias, a efecto de determinarse la convivencia lo que debe sopesar el juzgador es que haya persistido el propósito de formar una familia, con acompañamiento espiritual, apoyo económico y vida en común. Sobre el particular, recientemente en la sentencia SL186-2020 la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, puntualiza:

“El núcleo esencial de la convivencia que debe demostrar quien aspire a ocupar el lugar del pensionado en la recepción de la prestación, es la que exhiba condiciones de responsabilidad en el propósito de conformar una familia, brindar acompañamiento espiritual, apoyo económico y vida en común; adicionalmente, tal como se destacó en sentencia CSJ SL 22560, 5 may. 2005, «[...] entendida

ésta, aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia». (...)

Es cierto que la causante mostró siempre un acompañamiento espiritual y económico a la familia, compuesta por la esposa y los hijos; fiel reflejo de ello son los seguros de vida y de salud, la acción en el Club Campestre de Cali, la comunidad patrimonial de bienes, etc. Sin embargo, como lo esbozó el Juez Colegiado, este material probatorio no es determinante ni conducente a verificar que no hubo ruptura de «la vida en común» entre los esposos, al menos durante los dos últimos años de existencia de la causante.”

Empero, en tal efecto era carga probatoria del demandante acreditar que la separación física fue “*impuesta por la fuerza de las circunstancias*” (SL186-2020), punto en derredor del cual la Sala señala que el demandante también confesó, al absolver interrogatorio de parte, que había contraído matrimonio el 20 de mayo de 2006 con la señora LUZ STELLA OCHOA (min. 22:10) y que ha convivido hasta la actualidad con ella (min. 22:55), confesiones que coinciden con el informe de la investigación administrativa adelantada en su momento por la administradora de pensiones, según la cual “*no existió convivencia de manera permanente e ininterrumpida entre la asegurada fallecida y el señor LEONARDO DE JESUS RAMÍREZ RUZ, en calidad de compañero permanente, al momento del deceso, pues los mismos se encontraban separados (...) y el solicitante se había casado desde el año 2006 con la señora LUZ STELLA OCHA*” (fol. 43 vto.).

Debiendo precisar la Sala que en el presente asunto no puede hablarse de convivencias simultáneas, por la potísima razón de que el demandante confesó en los hechos de la demanda que no convivió con la causante, cuando menos, durante el último año de vida de ésta, lo que de suyo excluye la posibilidad de establecer una convivencia simultánea del señor RAMÍREZ CRUZ con la señora AGUIAR GLÓREZ y la señora OCHOA, conclusión que encuentra estribo también en los principios de consonancia y congruencia, visto que en el libelo genitor en parte alguna se refiere o se argumenta una convivencia simultánea del actor con la causante y con otra persona.

Ahora bien, antes de continuar con el análisis probatorio del caso, es de anotar que los hechos de la demanda y la declaración de parte rendida por el accionante, únicamente constituyen prueba en tanto le sea desfavorable a éste o favorable para su contraparte, tal y como dispone la regla de valoración probatoria establecida en el numeral 2 del artículo 191 del CGP, y que según las reglas de la experiencia las personas no mienten

en lo que les desfavorece, pero sí podrían hacerlo en lo que les beneficia, lo cual se acompasa con el vedamiento a las partes procesales de construir sus propias pruebas. Adicionalmente, memora la Sala que los informes de la investigación administrativa adelantados por las administradoras de pensiones, tienen el valor probatorio de la declaración de un tercero, conforme lo ha adocinado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL5814-2014, reiterada en la SL9417-2015; de suerte que, la misma debe ser valorada en desarrollo de las instancias judiciales.

Ello así, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión según lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y de la SS, del cardumen probatorio recaudado se arriba a la conclusión de que el señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ y la señora WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLÓREZ no convivieron bajo el mismo techo para el 6 de enero de 2008, pues desde los hechos de la demanda se confiesa que el demandante no convivió con la causante, cuando menos, durante el último año de vida de ésta, mientras que las confesiones del demandante al absolver interrogatorio de parte revelan que las interrupciones en la convivencia de la pareja RAMÍREZ AGUIAR no fueron impuestas por las circunstancias como adocina el precedente judicial, sino que obedecieron al hecho de que el señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ voluntariamente contrajo matrimonio con la señora LUZ STELLA OCHOA desde el 20 de mayo de 2006 y ha convivido con ella desde entonces y hasta la actualidad, de suyo que se probó que no cumple con los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por la señora AGUIAR FLÓREZ, debiéndose revocar la sentencia de primera instancia para en su lugar, absolver a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra.

No soslaya esta Corporación, que según las previsiones legales contenidas en el artículo 197 del CGP la confesión admite prueba en contrario; sin embargo, en el *sub lite* es claro que las demás pruebas obrantes, como el informe de la investigación administrativa, corroboran la confesión del actor, en tanto que aún bajo el supuesto de que se hubiere practicado la prueba testimonial, esta no podría ofrecer mayor fuerza de convicción que la misma confesión del demandante, en vista a que nadie como el propio señor RAMÍREZ CRUZ podría dar fe de las circunstancias en que desarrolló su relación sentimental con la causante; de consiguiente, que también se estimaría innecesaria la práctica de la testimonial instada.

Tampoco desconoce la Sala, el hecho de que mediante sentencia del 11 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado Once de Familia de Medellín (fols. 23 a 29) y confirmada

el 11 de febrero de 2010 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín (fols. 30 a 41), se declaró la existencia de una unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial de bienes entre el señor LENONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ y la fallecida WILGEN DEL SOCORRO AGUIAR FLÓREZ, desde el 12 de diciembre de 1981 hasta el 6 de enero de 2008 (fol. 28 vto.); no obstante, brota incontrastable que tal providencia se obtuvo por el ocultamiento que el señor RAMÍREZ CRUZ hizo de su vínculo matrimonial con la señora LUZ STELLA OCHOA, vigente desde el 20 de mayo de 2006 hasta la actualidad según su propio dicho, puesto que de la lectura de dicha providencia es claro que la parte actora no manifestó tal hecho en ese proceso judicial, de forma tal que dicho hecho tampoco fue tenido en cuenta por el referido despacho judicial de familia. Luego, a pesar de tratarse de una sentencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada, la misma no puede ser valorada desprevenida y superficialmente por la jurisdicción laboral, ante la grave irregularidad que se expone, máxime si se tiene en cuenta que la ilegalidad no pudo atar al juez de ninguna forma, tal y como lo ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia bajo la doctrina del antiprocesalismo, según la cual “(...) a pesar de la firmeza de un auto, este no se convierte en ley del proceso sino en la medida en que se acompase con el ordenamiento jurídico” (AL6282-2017); doctrina avalada igualmente por el Consejo de Estado al afirmar que: “las providencias ilegales no tienen ejecutoria por ser decisiones que pugnan con el ordenamiento jurídico, y no atan al juez ni a las partes.”¹.

En este sentido, estima esta la Sala que, ante tamaña irregularidad, el *a quo* debió compulsar copias de la actuación ante la autoridad competente, pero como así no lo hizo en una protuberante desatención de sus deberes como juzgador, esta Sala ordenará por Secretaría que se compulsen copias del presente expediente con destino a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se investigue la posible comisión de la conducta punible de fraude procesal por parte del señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ al interior del proceso ordinario de declaratoria de unión marital de hecho y sociedad patrimonial radicado bajo el n.º 05001-31-10-011-2008-00320-00 que éste promovió a través de poderhabiente judicial ante el Juzgado Once de Familia de Medellín y que conoció en consulta la Sala de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, con base en las pruebas recabadas en el presente proceso ordinario laboral.

2.3. COSTAS

¹ Sentencia del 30 de agosto de 2012, radicación n.º 11001-03-15-000-2012-00117-01(AC)

Costas en esta instancia a cargo de LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ y a favor de COLPENSIONES, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$2.725.578** equivalentes a 3 SMLMV, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 5 del Acuerdo n.º PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura. Las de primea instancia se revocan y corren a cargo de LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ y a favor de COLPENSIONES. Tásense por el juzgado de origen las agencias en derecho.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 12 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que denegó el decreto y práctica de la prueba testimonial instada con la demanda, y **CONDENAR** en costas a de LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ a favor de COLPENSIONES, fijándose al efecto la suma de **\$908.526** como agencias en derecho.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión 12 de marzo de 2020 proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que negó la nulidad propuesta por la apoderada judicial de la parte actora, y **CONDENAR** en costas a LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ a favor de COLPENSIONES, fijándose al efecto la suma de **\$908.526** como agencias en derecho.

TERCERO: REVOCAR la sentencia materia de apelación y consulta proferida el 12 de marzo de 2020 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, **ABSOLVER** a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor LEONARDE DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ.


CUARTO: COSTAS en esta instancia a cargo de LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ y a favor de COLPENSIONES, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$2.725.578**. Se **REVOCAN** las costas impuestas en primera instancia, para en su lugar, condenar en costas a LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ a favor de COLPENSIONES. Tásense por el juzgado de origen las agencias en derecho.

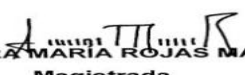
QUINTO: ORDENAR que por Secretaría de la Sala, se compulsen copias del presente expediente con destino a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se investigue la posible comisión de la conducta punible de fraude procesal por parte del señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ CRUZ al interior del proceso ordinario de declaratoria de unión marital de hecho y sociedad patrimonial radicado bajo el n.º 05001-31-10-011-2008-00320-00 que éste promovió a través de poderhabiente judicial ante el Juzgado Once de Familia de Medellín y que conoció en consulta la Sala de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, con base en las pruebas recabadas en el presente proceso ordinario laboral.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**.


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

Se declara surtido el presente acto y en constancia se firma por los que intervinieron.

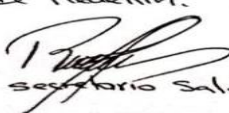

VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO
Magistrado


RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Constancia Secretarial
Se da constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.


SECRETARÍA Sala Laboral

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 70** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m.
Medellín, 27 de abril de 2021, y pueden consultarse en
<https://tribunalmedellin.com/laboral/estados-edictos-y-traslados-laboral>

Secretario